


OPINIÓN


RED COMPARTIDA

LOS CONSEJEROS DEL PRD CDMX QUE QUIERE MORENA

Victor Hugo Lobo Román dejó al PRD y se fue a Morena, la primera vez que lo invitaron fue para preparar la elección del 2018 para la campaña de Claudia Sheinbaum y AMLO, se quedó porque desde entonces intentó trasladar su influencia política a Morena, en ese entonces no pudo y hoy lo intenta. Resulta que la ofensiva que sostiene el diputado federal en contra del PRD de la CDMX y de Nora Arias como su presidenta tiene que ver con que, según sus cálculos, él podría mismo están las cosas no puede meter ni siquiera uno y le tienen vetada la alcaldía Gustavo A. Madero, que fue su terruño y refugio político, con el actual alcalde Janecarlo Lozano, que ya tienen sus consejeros, y la bronca no para ahí, su leal adversario, Francisco Chíguil, es quien controla la otra parte de la alcaldía de tal manera que la única manera de tener gente, posiciones y dinero de Morena es contar con una estructura electoral, en efecto, nos dicen que lo que busca es quedarse con lo que queda del PRD capitalino, pasarlo a Morena, desaparecer a la oposición –algo que podría hacer, y tal vez ya le ofrecieron, Nora Arias, no lo sabemos a ciencia

cierta– y tener representatividad.

Arranca el nuevo proyecto de videovigilancia en Morelos y el mensaje es claro: las decisiones y acciones las está tomando directamente la gobernadora Margarita González, quien ha puesto el tema de seguridad como prioridad real de su gobierno; con arcos carreteros con lectura de placas, cámaras estratégicas y C2 municipales ya en operación, sumado a la llegada del nuevo fiscal del estado –un hombre de carrera con más de 20 años de servicio– existe pleno interés en dar seguimiento puntual a los problemas de seguridad para resolverlos de fondo; con coordinación federal, uso eficaz del Fortamun y una visión de inteligencia y control territorial, en Morelos comienza a perfilarse una estrategia que apuesta por continuidad, profesionalismo y resultados, no por la simulación.

Usted se va a acordar de Jaime Ongay Ortiz porque fue quien en el 2005 participó en la detención ilegal de la periodista Lydia Cacho y luego con el paso de los años acumuló denuncias por corrupción de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres, y puede incluso llegar a la oficina de la gobernadora Mara Lezama. El asunto es que Ongay Ortiz es el director de Registro y Supervisión de Empresas y Servicios Privados de Seguridad y no sólo ve a las empresas el ramo, también le toca relacionarse con los usuarios de estos servicios, ya sean bancos o tiendas departamentales, y en todos los casos hay problemas, incluso a la gobernadora ya le pidieron empresarios y abogados del sector y usuarios del mismo, la destitución inmediata de los funcionarios involucrados en esquemas de pago que van más allá de la regulación ofi-

cial. Las denuncias contra el funcionario estatal siguen sin respuesta o consecuencias.

Resulta que el Sindicato Nacional de Trabajadores de México del Transporte y la Construcción Lázaro Cárdenas tiene una mina en Tequixquiac y ayer el municipio de Zumpango fue y la clausuró a pesar de que cuenta con todos los permisos correspondientes emitidos por el gobierno estatal y las autoridades federales competentes, mientras que el Ayuntamiento de Zumpango no tiene jurisdicción ni facultades legales para intervenir en una actividad que se desarrolla fuera de su territorio y que cumple con la normatividad vigente. Ya el sindicato está buscando a las autoridades competentes para que intervengan, revisen estos actos fuera de la ley y garanticen el respeto al marco legal, las competencias de cada nivel de gobierno y al Estado de Derecho.

Ahora que en el ISSSTE avanza la compra de aseo LA-5I-GYN-05IGYN005-N-1-2026, el foco rojo se coloca sobre el secretario de Administración 'cártel de la limpieza'. Entre los factores que motivan la sospecha están los seis contratos que se han llevado en los últimos años las compañías relacionadas a José Juan Reyes Domínguez, los requisitos que se acusa han sido amañados, así como el paso de Javier Tapia por el Instituto de Martí Baires, y es que antes de llegar al IPN el funcionario se encargaba de los recursos del ISSSTE, por lo que se estima habría dejado "escuela" en Butrón Fosado; recordemos que Tapia Santoyo hoy se encuentra suspendido e indagado por desvío y enriquecimiento oculto a solicitud de la Secretaría Anticorrupción de Raquel Buenrostro.